

Punta Arenas, ocho de febrero de dos mil veinticuatro.

VISTOS:

Se reproduce la sentencia en alzada, con excepción de los considerandos noveno a décimo cuarto, que se eliminan, y se tiene, además, en consideración:

PRIMERO: Que, en estos antecedentes, NADIA ISABEL PARRA MILLATUREO; ROSALBA MARINA PARRA MILLATUREO; y SANDRA ANGÉLICA PARRA MILLATUREO, deducen demanda de indemnización de perjuicios derivados de la responsabilidad extracontractual, en contra del ESTADO DE CHILE, a causa de los hechos que habrían sufrido en manos de agentes del Estado, en el mes de marzo de 1984, en el contexto de violaciones a los Derechos Humanos, los que en síntesis, habrían consistido en la tortura y apremios ilegítimos sufridos en tal contexto, al haber sido detenidas, trasladadas a la 1° Comisaría de Carabineros de Punta Arenas, y luego a la Cárcel de la ciudad, solicitando el pago de la suma ascendente a \$200.000.000.- para cada una de ellas.

SEGUNDO: Que, el Fisco de Chile, sin perjuicio de controvertir los hechos alegados, opuso la excepción de prescripción extintiva de las acciones, atendida la data de los hechos denunciados, y en definitiva, solicitó el rechazo de la demanda. En subsidio, pidió al Tribunal, que la regulación del daño moral se redujera considerablemente en relación a lo demandado, en atención a la naturaleza de los hechos denunciados, y a la regulación que respecto de similares circunstancias a las denunciadas, han realizado nuestros Tribunales Superiores de Justicia, y que en todo caso, de determinarse la procedencia de un pago indemnizatorio, éste sólo disponga reajustes desde que se acoja la demanda y se establezca la obligación, esto es, desde que la sentencia se encuentre firme y ejecutoriada, y en relación a los intereses, que los mismos se dispongan desde que el Fisco de Chile se encuentre en mora, una vez requerido de pago.

TERCERO: Que, la sentencia de primer grado resolvió: "Que se rechaza la demanda en todas sus partes, sin costas, por haber tenido las actoras motivo plausible para litigar",



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: PTXYXLKQVTR

fundada en que se daba lugar a la excepción de prescripción extintiva opuesta por el Fisco de Chile.

CUARTO: Que, ante todo, resulta imperioso para dar respuesta a la cuestión controvertida, establecer los hechos acreditados en estos autos, y así las cosas, de acuerdo a la prueba aportada a juicio, es posible indicar que efectivamente las hermanas NADIA ISABEL PARRA MILLATUREO; ROSALBA MARINA PARRA MILLATUREO; y SANDRA ANGÉLICA PARRA MILLATUREO fueron "víctimas del Estado", prisioneras políticas y torturadas, conforme da cuenta la "NÓMINA DE PERSONAS RECONOCIDAS COMO VÍCTIMAS", de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, siendo un hecho respecto del cual el Fisco de Chile, por haber formado parte del referido proceso, no está en condiciones de controvertir, quedando por tanto, establecido.

En el mismo orden de ideas, se logró acreditar de la propia prueba aportada por la demandada, que las actoras son acreedoras de los beneficios de reparación de las Leyes N° 19.992 y 20.874, en su calidad de víctimas de Prisión Política y Tortura (Ley Valech), percibiendo una pensión ascendente en junio de 2022 -fecha informada- a la suma de \$207.774.-

Que en relación a los hechos propiamente tales, de la prueba documental y testimonial aportada, especialmente de la declaración de Romina Valentina Yáñez Vásquez, funcionara del programa de Reparación y Atención Integral en Salud y Derechos Humanos PRAIS, es posible establecer que las hermanas Parra Millatureo, fueron detenidas en el mes de marzo de 1984, recibiendo malos tratos de parte de Carabineros de Chile, trasladadas a la 1° Comisaría de la ciudad, y posteriormente, a la Cárcel, para ser luego liberadas, habiendo transcurrido un periodo de tiempo no superior a 30 días.

Durante dicho lapso, todas ellas fueron sujetos de una detención ilegal; recibieron malos tratos y apremios físicos y psicológicos, de parte de Carabineros de Chile; fueron víctimas de abusos de carácter sexual; presenciaron la "tortura" de otros detenidos, y fueron -a los días después-



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: PTXYLKQVTR

ingresadas ilegalmente a la Cárcel de Punta Arenas, aun cuando respecto de su estadía en dicho recinto penitenciario, todas indicaron que significó para ellas el cese de los referidos apremios y abusos de diversa índole, para posteriormente, y en una fecha indeterminada que sitúan desde los 6 días y hasta máximo 30 días, ser liberadas.

QUINTO: Que así las cosas, y atendido lo anterior, en relación a la excepción de prescripción extintiva opuesta por el Fisco de Chile, respecto de los hechos situados en el mes de marzo de 1984, y establecidos por este Tribunal de alzada, dada la naturaleza de la causa del hecho ilícito y su contexto, y la naturaleza de los daños sufridos por las actoras -reconocido por el Estado de Chile, como se indicó-, no resulta posible dar aplicación -sin más- a lo previsto en los artículos 2332 en relación al artículo 2497, ambos del Código Civil, ni en subsidio, lo previsto en los artículos 2515 en relación al artículo 2514, ambos del Código ya citado, por lo que la excepción de prescripción extintiva no puede prosperar.

SEXTO: Que, cabe tener presente para efectos de resolver lo anterior, que con la aprobación por el Estado de Chile del Pacto de San José de Costa Rica el 23 de agosto de 1990, mediante Decreto Supremo N° 873, del Ministerio de Relaciones Exteriores, publicado en el Diario Oficial de 5 de enero de 1991, nuestro país se ha integrado al Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, lo que significa que está conformado por un conjunto de normas y principios sobre los derechos esenciales de las personas, y, a través de este instrumento, los Estado Parte someten su ordenamiento jurídico a la obligación de proteger los derechos humanos, y de garantizar el acceso a la justicia en su amplia dimensión.

Por otra parte, se debe tener también en consideración, la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, de 1969, norma que se ha incorporado a nuestro derecho interno por Decreto Supremo N° 381, del Ministerio de Relaciones Exteriores, publicado en el Diario Oficial de 22 de junio de 1980, en sus artículos 26 y 27.



Finalmente, y en este mismo orden de ideas, la Convención Americana de Derechos Humanos, establece - específicamente en el tema que nos convoca- en su artículo 63.1 expresamente que: "1. Cuando decida que hubo violación de un derecho o libertad protegidos en esta Convención, la Corte dispondrá que se garantice al lesionado en el goce de su derecho o libertad conculcados. Dispondrá asimismo, si ello fuera procedente, que se reparen las consecuencias de la medida o situación que ha configurado la vulneración de esos derechos y el pago de una justa indemnización a la parte lesionada", disposición que debe interpretarse en consonancia con lo previsto en el artículo 2° del referido instrumento, y considerando lo resuelto además, en el caso "Órdenes Guerra y otros vs. Chile" por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sentencia de fecha 28 de noviembre de 2018, autos en los cuales se reconoce por la Corte que el objetivo de la sentencia, fue establecer fundamentos jurídicos para evitar la aplicación de la prescripción de la acción civil de indemnización de perjuicios por daño moral, en casos de Derechos Humanos conocidos por tribunales chilenos.

SÉPTIMO: Que a mayor argumentación, siendo imprescriptibles los delitos de lesa humanidad, ello trae como consecuencia necesaria, que la acción de indemnización de perjuicios también tenga la referida naturaleza, atendida la reparación integral que se debe entregar a sus víctimas, conforme a los principios generales del derecho internacional ya citado, debiendo integrarse nuestras normas por el derecho internacional de los derechos humanos, vigente en Chile, al tenor además, de lo previsto en el artículo 5° de la Constitución Política de la República, todo lo cual reafirma el rechazo de la excepción de prescripción extintiva de las acciones ejercidas.

OCTAVO: Que establecido el hecho y su naturaleza, y rechazada la excepción opuesta, cabe indicar que resulta necesario señalar que los daños sufridos por las demandantes se encuentran suficientemente acreditados, tanto por las características de la agresión, así como por su contenido, teniendo en especial consideración las precisiones que a este



respecto dio cuenta la declaración de la psicóloga que atendió a las actoras en el contexto de reparación, los informes psicológicos allegados a la causa, así como la demás prueba que contextualiza la forma en la cual las afectadas vieron truncado su plan de vida, y las consecuencias a causa de la detención y apremios físicos, psicológicos y sexuales debieron enfrentar.

NOVENO: Que la determinación del monto en el que se ha de avaluar la indemnización por concepto de daño moral, constituye un tópico naturalmente complejo, pues dada la naturaleza eminentemente subjetiva que lo caracteriza, resulta prácticamente imposible fijar una cantidad de dinero como reparación exacta de dicho daño, por lo que se debe recurrir a razones de justicia y equidad que tiendan a una regulación prudencial por parte del sentenciador, que conjuguen las condiciones y características personales de las víctimas; las circunstancias de producción y magnitud del daño sufrido; todo ello, considerando además, que la indemnización no puede transformarse en una fuente de lucro.

DÉCIMO: Que en tales términos, este Tribunal de Alzada estima que la especie de daño moral sufrido por las actoras es de carácter grave y cierto, que importa tanto el sufrimiento directo producto de su detención ilegal, la prisión política a la que estuvieron sujetas por una fecha indeterminada, que pudo llegar a ser casi un mes, las torturas sufridas durante dicho período, a lo que se agrega un detrimento en sus condiciones de vida en los ámbitos laboral, familiar y social, todo lo cual constituyen elementos que efectivamente han de ser sopesados al momento de determinar el monto de la indemnización de aquel daño.

DÉCIMO PRIMERO: Que, con todo, resulta necesario que los tribunales procuren mantener cierta consistencia y coherencia en sus determinaciones, a fin de otorgar un trato similar a casos potencialmente semejantes.

Así las cosas, en la determinación prudencial de la cuantía de la indemnización que se ha de fijar, se han de tener también presentes los baremos obtenidos del análisis de



la jurisprudencia existente sobre la materia, concordándolos con las particularidades de cada caso.

DÉCIMO SEGUNDO: Que conforme a lo anterior, en concepto de estos sentenciadores, implica regular el monto de la indemnización por daño moral causado a las actoras, que prudencialmente se estima que una suma de setenta y cinco millones de pesos, pues dicha suma resulta proporcional a los parámetros indicados.

DECIMO TERCERO: Que además, la suma antes indicada habrá de ser pagada reajustada conforme a la variación que experimente el índice de precios al consumidor, desde la fecha en que la presente sentencia se encuentre ejecutoriada y la época de su pago efectivo; y devengará los intereses corrientes desde que el deudor se encuentre en mora.

DÉCIMO CUARTO: Que, por otra parte, dado que la defensa del interés fiscal constituye una obligación del ente estatal, lo que desde ya implica la existencia de motivo plausible para litigar, se le eximirá del pago de las costas de la causa.

Por estas consideraciones, y de conformidad a lo dispuesto en los artículos 186 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, **SE REVOCA** la sentencia de fecha veintiocho de noviembre de dos mil veintitrés, dictada por el Juez Titular del 2° Juzgado de Letras de Punta Arenas, por la que se rechazó la demanda de indemnización de perjuicios opuesta por el actor, atendido a que se acogió la excepción de prescripción extintiva, y, **en su lugar**, se declara:

I. Que se rechaza la excepción de prescripción extintiva de las acciones, opuesta por el Fisco de Chile;

II. Que se acoge la demanda, y en consecuencia, se condena al Fisco de Chile a pagar una indemnización a favor de las actoras, Nadia Isabel Parra Millatureo, cédula nacional de identidad N° 11.219.294-8; Rosalba Marina Parra Millatureo, cédula nacional de identidad N° 9.412.399-2; y Sandra Angélica Parra Millatureo, cédula nacional de identidad N° 10.861.610-5, ascendente a la suma de setenta y cinco millones de pesos, para cada una de ellas, monto que se pagará reajustado de acuerdo a la variación que experimente



el índice de precios al consumidor, calculado desde la fecha en que se encuentre firme o ejecutoriada esta sentencia y hasta el pago efectivo de la indemnización, misma que devengará intereses legales desde que el Fisco se encuentre en mora de cumplir lo resuelto.

III. Que no se condena en costas al Fisco de Chile, por las razones ya expresadas en el considerando respectivo.

Redacción a cargo del Fiscal Judicial Sr. Miño.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Rol 467-2023. CIVIL.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: PTXYXLKQVTR

Pronunciado por la Primera Sala de la C.A. de Punta Arenas integrada por Ministra Inés Recart P., Ministro Suplente Jaime Alvarez A. y Fiscal Judicial Pablo Andres Miño B. Punta Arenas, ocho de febrero de dos mil veinticuatro.

En Punta Arenas, a ocho de febrero de dos mil veinticuatro, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.

